Imprimir

Con el inicio del mes de mayo se anunció el paro armado de las Autodefensas Gaitanistas en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Chocó, Bolívar, Atlántico y Sucre; justificado tras la extradición de uno de sus máximos líderes, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, quien se entregó o fue capturado en la región de Urabá.
Después de la captura en octubre de 2021, Otoniel venía brindando entrevistas y diligencias ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) y con la Comisión de la Verdad, marco en el cual había salpicado a las ya mal afamadas fuerzas armadas, en especial al Ejército, así como a poderosos políticos.

En el comunicado que anuncia el paro del grupo paramilitar se dice que una de las motivaciones para decretarlo es que, con la extradición del máximo jefe de las AGC el salpicado gobierno colombiano “pisotea los derechos de las víctimas”, sobre todo haciendo referencia al derecho a la verdad.

Para algunos parecerá extraño que un grupo armado delincuencial, sobre todo uno paramilitar, abogue por los derechos de los campesinos víctimas o que le interese el esclarecimiento de la verdad. Pero dando cuenta de la trayectoria de los grupos paramilitares en Colombia se evidencia este repertorio de guerra, donde comunican la defensa del campesinado mientras masacran comunidades enteras. Así entonces, podría ser este un telón para mostrar en época electoral que el país es inseguro y que necesitamos un presidente que abogue por la seguridad democrática. Sería este paro un intento para prender las alarmas de inseguridad en el país en favor del candidato del continuismo, en favor del partido que gobierna y su líder imputado.

El segundo panorama podría tener consecuencias mucho más graves a corto plazo para la seguridad y la estabilidad del país. Y es que podríamos estar asistiendo a una “rebelión” o “insurrección” por parte de las AGC frente al gobierno del Centro Democrático. Si esto es así, podríamos esperar una desestabilización de los pactos que han permitido que las AGC y la denominada Oficina de Envigado comanden las estructuras armadas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; así como también generaría choques militares entre las AGC y las

fuerzas del Estado en las regiones dónde antes cooperaban.

La extrema derecha del país y la élite naciente del narcotráfico se posicionó en el poder durante más de 20 años con el discurso de la guerra contra las guerrillas, cometieron y justificaron todo tipo de vejámenes en el enfrentamiento contra los grupos insurgentes, para ello pusieron a andar con mucha capacidad a las estructuras paramilitares, operaron bota con bota militares y paramilitares en distintas regiones del país, cooperaban para matar guerrilleros y civiles que luego disfrazaban y presentaban los mandos militares y el mismos Presidente Uribe, como triunfos de esa guerra.

Si el segundo panorama es el más acertado estaríamos asistiendo a una rebelión por parte de un grupo que el mismo Estado, las fuerzas armadas y sus élites mafiosas pusieron a andar. Si nos encontramos más cercanos a un escenario como el primero también podríamos pensar que precisamente el telón es para imposibilitar que se desarrollen las elecciones, donde está en juego que la mafia de la ultraderecha pierda el poder ejecutivo y político.

Juan Manuel Vargas Vasco, Sociólogo.

Foto tomada de: El Tiempo.com